



Revista Sociedad y Economía
ISSN: 1657-6357
revistasye@univalle.edu.co
Universidad del Valle
Colombia

Salazar, Boris
Colombia: guerra, poder y negociación
Revista Sociedad y Economía, núm. 2, abril, 2002, pp. 7-23
Universidad del Valle
Cali, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99617937001>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

Colombia: guerra, poder y negociación

Boris Salazar¹

Resumen

Lo que está en juego en el conflicto armado colombiano es el poder. El recién terminado proceso de negociaciones entre el gobierno y las Farc ocultó, aunque no del todo, los esfuerzos de fortalecimiento militar en que se empeñaron las dos partes. Hoy hay una nueva situación estratégica a partir de la cual puede esperarse que la guerrilla acepte deponer el uso de las armas y diluir su organización militar, máxima concesión relativa, a cambio de hacer parte del nuevo reparto de poder resultante, máximo beneficio relativo. Una propuesta razonable de negociación debe partir de considerar los beneficios mutuos de las partes y la exclusión de la mesa de los productos de la depredación. La idea de *comprar* a los agentes violentos es una forma de iniciar la concreción de este tipo de enfoque.

Abstract

Power is what is at stake in the armed conflict of Colombia. The peace talks, recently broken off, between Government and Farc belied the half-disclosed efforts toward military strengthening in which both parties were actively engaged. There is today a new strategic situation that allows to expect that the guerrilla consent to forgo the use of arms and to dilute its military organization: that would be a maximal relative allowance for a maximal relative gain —to take a partial share in the new allotment of the incoming power. A reasonable proposal for negotiation has to start by pondering the mutual benefits of both parties and excluding from the talks the products of depredation. The idea of buying up the violent actors is a way of setting forth the substantiation of this type of approach.

Palabras claves: Colombia, conflicto armado, negociación.

¹ Economista, profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. El autor agradece los comentarios de María del Pilar Castillo.

Hace unos años, uno de los analistas militares más reconocidos del país, Alfredo Rangel (1998), advertía a los colombianos acerca del salto cualitativo que estaba a punto de dar la guerrilla colombiana:

“[...] el país no parece haberse percatado de que esta guerra de más de cuarenta años podría haber entrado en su fase más dura y cruenta: su fase terminal. La fase en que las guerrillas colombianas, como todas las guerrillas que en el mundo han sido, aspiran a dejar de serlo para empezar a transformarse en ejércitos regulares; es la misma fase en que también pretenden sustituir gradualmente la guerra de guerrillas para pasar a la guerra de movimientos y de posiciones. Y la historia demuestra que esto no puede hacerse si no es en medio de una gran crisis del establecimiento y de un creciente vacío de poder que propicie las condiciones más favorables para lograr esos saltos cualitativos” (Rangel, 1998: 64-65).

El pronóstico lineal de un paso necesario a la fase superior y terminal de la guerra parecía razonable en el momento en que fue lanzado al mundo. Mientras las Farc se encontraban en el pico más alto de su desarrollo militar, con algunas victorias notables sobre fuerzas de élite del ejército regular, el establecimiento a duras penas sobrevivía en medio de una gran crisis de legitimidad. Hoy, sin embargo, todo el mundo sabe que la guerrilla colombiana nunca se transformó en un ejército regular y que la estrategia de la guerrilla móvil ha regresado, en la forma de terror generalizado contra la población y contra los símbolos más notorios del Estado. ¿Por qué las cosas no ocurrieron tal como estaba previsto? Este ensayo pretende sugerir cómo el conflicto colombiano ha evolucionado hasta la situación de hoy, y proponer una reflexión inicial acerca de las condiciones para una negociación real entre las partes comprometidas en él. Para hacerlo, parte de un supuesto fundamental: lo que está en juego en el conflicto armado colombiano no es ni el territorio ni la voluntad de paz de los contendientes, sino el poder.²

Lo que queda después de la zona

Hay, por supuesto, unas fotos del presidente Pastrana, con y sin el comandante Marulanda, en algún sitio del Caguán. A riesgo de ir en contra de la sabiduría convencional, esas fotos no representan la caída ingenua de un presidente frívolo en los brazos de un enemigo experimentado y malicioso. Sólo representan el acuerdo para conversar de dos de las partes en conflicto, mientras se preparaban para una guerra a una escala mayor. Detrás del presidente estaban el Plan Colombia y la

² Sólo unos pocos analistas coinciden en que lo que está en juego en el conflicto colombiano es el poder. Rafael Pardo Rueda (2002: 76) y Carlos Lozano (2002: 126), desde posiciones ideológicas distintas, coinciden en esa apreciación.

inversión en el crecimiento y sofisticación de las fuerzas armadas. Detrás del jefe de las Farc estaban la continuación, a una escala mayor, de su crecimiento militar por la vía de la tributación forzada y de la participación en las ganancias de los cultivos ilícitos. Que la célebre empatía entre los dos no era lo fundamental lo comprueba una frase que sobre las visitas del presidente al Caguán le soltará el comandante Marulanda a Antonio Caballero: “Pues él viene acá en su helicóptero, echa dos chistes y se va...” (Caballero, 2002: 24). Que ambos se preparaban para una guerra larga y cruenta se puede comprobar haciendo una revisión sencilla de sus inversiones en hombres, equipamiento militar, tecnología de telecomunicaciones y poder de fuego. Los resultados son obvios para ambas partes: las Farc cuentan hoy con 16.500 combatientes armados y entrenados (con tecnologías importadas, incluso), sin contar las redes de apoyo rurales y urbanas, con las que andarían cerca de los 20.000 hombres en armas. Por su parte, las fuerzas armadas regulares han crecido en número (120.000 hombres), en calidad y en tecnología para la guerra. Ahora cuentan con varios batallones de despliegue rápido, con un apoyo aéreo sólido y una tecnología de vigilancia y localización sofisticada que ha mejorado, en forma crucial, su capacidad para entrar en combate en una guerra compuesta de múltiples escenarios.

Pero esto sólo habla de cómo los contendientes más visibles se prepararon para la guerra que se ha venido librando en los últimos años, y deja por fuera la evolución endógena del conflicto y los cambios estratégicos ocurridos. Es obvio que unas fuerzas regulares dotadas de mejor tecnología y con hombres mejor entrenados contribuyeron a contener lo que parecía la transformación inevitable de la guerrilla en un ejército regular. Sin embargo, este resultado imprevisible no fue sólo el resultado de la actividad de las fuerzas armadas regulares. Es imposible que un ejército regular logre enfrentar con éxito a una guerrilla que tiene como su objetivo central el poder y que está repartida, en unos cien frentes y varias columnas móviles, por todo el territorio nacional. Aquí aparece el impacto de la evolución endógena del conflicto armado colombiano. El crecimiento vertiginoso de las fuerzas de autodefensa o paramilitares, que hoy ya pasan de los 10.000 hombres en armas, son la otra restricción básica que han tenido las Farc para su avance estratégico y su transformación en ejército regular. Más allá de la discusión acerca de los orígenes (estatales, espontáneos o ligados al narcotráfico) de las autodefensas, lo que no está en discusión es que su expansión explosiva hace parte de las tendencias básicas de nuestro conflicto. En una situación en la que el Estado no tiene el monopolio del uso de las armas y no garantiza, en general, ni los bienes ni la vidas de sus ciudadanos, la aparición y consolidación de agencias de protección alternativas puede considerarse como un evento natural, producto de la necesidad de los ciudadanos de obtener protección efectiva a un costo menor que el exigido por la guerrilla en la forma de tributación forzada.

Desterritorialización y agencias de protección

Esto no quiere decir que la única agencia de protección sean las autodefensas. La realidad colombiana es más compleja: tanto en el campo como en las ciudades abundan las agencias de protección. En todas aquellas situaciones en las que la depredación se impone, los afectados tienden a unirse para crear, buscar o contratar alguna forma de protección. La guerrilla misma actuó en el pasado como una agencia de protección frente a las acciones de latifundistas y traficantes en las regiones en las que tenía presencia militar. Hoy, en su esfuerzo por alcanzar el status de Estado y por acercarse al poder político, las Farc han promulgado leyes de tributación que no han sido aceptadas por aquellos a quienes van dirigidas. Una fracción de los amenazados ha elegido otras agencias de protección, otros siguen pagando bajo coacción, y otros como el resultado de secuestros y otras prácticas extorsivas. En general, ninguno de estos contratos son voluntarios y no permiten caracterizar a las Farc como una agencia de protección de esos ciudadanos.

¿Qué decir de las poblaciones que no están afectadas por la ley 002, pero que sobreviven en territorios en disputa? La evidencia muestra que las Farc no han protegido en forma efectiva a la población amenazada por las acciones de los paramilitares. Dado su objetivo de fortalecer su capacidad de amenaza para alcanzar la negociación del poder en sus propios términos, las Farc no corren el riesgo de proteger a “su” población o a la población de los territorios en disputa porque sería demasiado costoso para su aparato militar y para la continuidad de su proyecto político. Y aunque la decisión en cada caso corresponde al frente en cuestión, la racionalidad de las Farc parece favorecer la preservación de sus combatientes sobre el costo en vidas y en desplazamiento para la población amenazada.³ Esto podría interpretarse como una consecuencia del humanismo absolutista que guía la conducta de las Farc: si son el pueblo en armas, y en el largo plazo su triunfo asegura la supervivencia del pueblo en mejores condiciones, un objetivo de primer orden es la preservación de ese ejército que representaría a los más pobres y a los menos protegidos, más allá de las consecuencias en vidas y pérdida de bienestar para la población civil.

Ahora bien, no todas las agencias de protección pueden sobrevivir y crecer al mismo tiempo y en el mismo territorio. Una agencia de protección no puede compartir su territorio con otra, y sólo la guerra puede decidir cuál de los dos, tres o más agencias es la que asegura el control del territorio en disputa. Como lo plantea Robert Nozick la dimensión territorial de las agencias de protección es básica para entender su dinámica y los efectos de sus acciones:

³ En la magnífica crónica que hizo Antonio Caballero (*Op. Cit.*, p.23) de sus conversaciones con el comandante Marulanda en el Caguán, cabe resaltar la respuesta del último ante la pregunta de Caballero sobre el uso de cilindros explosivos: “Que la guerra es la guerra y ellos no pueden perder tiempo echando tiritos hasta que le lleguen refuerzos a la policía de un pueblo, cuando basta un cilindro”. No queda duda acerca de qué costos preocupan al jefe de las Farc.

“Una agencia tiene su poder centrado en un área geográfica; la otra agencia, en otra área. Cada una gana las batallas peleadas cerca de su centro de poder, estableciéndose cierto gradiente. Las personas que tratan con una agencia, pero viven bajo el poder de la otra, se mudarán más cerca del cuartel general de su agencia o cambiarán su patrocinio a la otra agencia de protección. (El límite es tan conflictivo como el límite entre Estados)”. (Nozick, 1974: 29)

Esto podría conducir a la tentación de trazar un mapa de la división territorial del país entre los diversos agentes armados. En ese mapa habría un Norte en manos de las autodefensas, un Sur en manos de la guerrilla y un centro del país, con fronteras porosas e inseguras, en manos de las fuerzas armadas regulares. Pero una mirada más detenida de ese mismo mapa descubriría la existencia de muchos puntos de superposición de las fuerzas en conflicto. En lugar de territorios uniformes con una dominación definida, lo que puede observarse es la proliferación de puntos de superposición o de confrontación que sólo son conocidos por la opinión pública a través de las noticias de masacres, ejecuciones y combates. Estos puntos de superposición de agentes armados, y de incertidumbre en materia de protección, se extienden sobre todo el territorio nacional, haciendo naufragar la idea de una territorialidad definida en Colombia. Ya no ocurren tan sólo en los territorios que todos suponen en disputa: Barrancabermeja, parte del Magdalena Medio, parte de Antioquia, el Casanare, el Arauca, y lo que antes era la antigua zona de distensión y sus alrededores, sino que aparecen en las comunas de las grandes ciudades y en las zonas rurales de departamentos que habían sido menos afectados por la expansión del conflicto. Hoy, en las grandes ciudades, fronteras invisibles marcan territorios que están cambiando de dominio en forma constante y en los que la violencia es la única forma de regular una situación inestable y volátil. Milicias urbanas, pandillas, delincuencia común, protectores ocasionales forman redes armadas que cambian de lealtad y de aliados en forma permanente.

Daniel Pécaut (2001) es quien mejor ha caracterizado la creciente desterritorialización del conflicto colombiano. El punto central de su interpretación es que para las organizaciones armadas los territorios y las poblaciones que en ellos sobreviven sólo son importantes en función de sus fines estratégicos. Si la financiación de la guerra y el avance de sus planes de expansión requieren de su implantación en un nuevo territorio, la organización armada emprenderá su conquista, someterá a la población (allí donde no haya alguna actividad económica rentable para los civiles), y ejercerá control sobre el territorio hasta el momento en que lo pueda hacer. Si otra organización entra a disputar a sangre y fuego su control territorial, lo defenderá hasta el punto en que resulte demasiado costoso seguirlo haciendo. El ciclo de su actividad territorial queda abierto; sin embargo, dentro de sus planes siempre estará la posibilidad de regresar al territorio, cobrar venganza y

recuperar su control. Más aún, dentro del complejo escenario del conflicto colombiano no se requiere controlar un territorio para operar dentro de él y alcanzar resultados militares, políticos y económicos.⁴ Es lo que Pécaut (*Ibid*: 238) ha denominado la “homogeneización del espacio” por el conflicto. Ahora todo el espacio hace parte del territorio en conflicto, y sobre todos los puntos de ese espacio las organizaciones armadas y sus redes actúan, con intensidad diversa, en distintos momentos, con resultados cambiantes.

La nueva situación estratégica

Si las organizaciones armadas han homogeneizado el espacio para alcanzar sus fines estratégicos, ¿cómo se ha transformado la situación estratégica por efecto de esas acciones? La expansión de las autodefensas, la actualización tecnológica de las fuerzas armadas y el aprendizaje de la población civil,⁵ expresado en la aparición de formas de resistencia abierta a la acción de las organizaciones armadas, han conducido a una modificación radical de la estrategia de las organizaciones guerrilleras. Atrás quedaron los combates abiertos, con un número considerable de combatientes comprometidos, con los que las Farc demostró, en 1998, que estaban en capacidad de concentrar fuerzas, atacar y tomar posiciones, tomar prisioneros y destruir unidades de élite del ejército regular. La nueva estrategia tiene en cuenta la superioridad en materia de tecnología aérea, transporte y vigilancia de las fuerzas armadas regulares. Las pérdidas sufridas en el retiro de Mitú y la destrucción de la fuerza especial que enviaron hacia Norte de Santander, debieron sugerirle a las Farc que la concentración de fuerzas era contraproducente y costosa: con un enemigo dotado de una capacidad de localización y detección superior (incluso nocturna), era claro que concentrar fuerzas para empresas militares de mayor escala podría ser un suicidio y llevaría a perder lo construido en los últimos años.

Los objetivos básicos no han cambiado, sin embargo. La toma del poder político y la destrucción del Estado oligárquico siguen siendo los objetivos básicos de la estrategia de las Farc y del Eln (en la medida de sus posibilidades reales, que hoy son muy limitadas para esta última organización). Pero ha habido un giro estratégico fundamental. De lo que se trata ahora es de llevar al Estado (o a quien lo represente en ese momento), a través de acciones de terror contra la población y contra la infraestructura básica, a una negociación en los términos que las Farc han definido

⁴ Un ejemplo reciente de la desterritorialización del conflicto puede verse en el secuestro de la candidata a la presidencia, Íngrid Betancur. La candidata fue secuestrada sobre la vía principal entre Florencia y la antigua zona de tensión, a unos pocos kilómetros de la ya reconquistada San Vicente del Caguán. Las autoridades militares le advirtieron de los riesgos que podría correr. La percepción de los militares era la correcta: no tenían control sobre el territorio de la antigua zona del despeje y, sobre todo, no controlaban la principal vía hacia San Vicente.

⁵ Que el aprendizaje de la población era un elemento básico de la dinámica del conflicto ya lo habíamos planteado, con María del Pilar Castillo, en *La hora de los dinosaurios. Conflicto y depredación en Colombia*.

y anunciado en los últimos años. El objetivo fundamental ya no es la derrota militar de las fuerzas armadas regulares, sino la erosión continua y creciente de la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos y a sus propiedades hasta hacerlo inviolable en su dimensión fundamental: la seguridad de todos los asociados. La voladura de puentes, de estaciones repetidoras, de torres de energía eléctrica (y hasta de hidroeléctricas enteras que alimentan a la capital), y el bloqueo del suministro de alimentos a capitales departamentales no preparan el avance victorioso de las tropas de las Farc hacia las ciudades, sino la destrucción creciente de la credibilidad y de la autoridad del Estado. Un Estado que no puede garantizar la libre circulación de los ciudadanos, que es incapaz de proteger los servicios básicos y la propiedad y que ha dejado llevar la supervivencia misma hasta el mayor grado de incertidumbre de toda la historia de Colombia, tiene que negociar su condición de Estado y dejar que otro proyecto político conduzca a la nación, podría discurrir una versión hipotética de lo que sería la estrategia actual de las Farc.

En 1998 las Farc no seguían la misma estrategia. La destrucción del Estado, y su reemplazo por uno de otro tipo, pasaba por la victoria militar sobre un ejército debilitado por sus derrotas recientes y por la percepción generalizada de su ineficacia en el combate al desafío subversivo. Pero la zona de distensión, el avance de los paramilitares y la modernización de las fuerzas armadas cambiaron la situación en forma crucial. Contrario a lo que afirma el consenso existente sobre el tema, la zona de distensión no fortaleció a las Farc. Sí, es cierto que le permitió fortalecer su aparato militar, consolidar sus finanzas y operar desde un centro firme sobre las regiones cercanas. Pero al mismo tiempo es cierto que las expuso a dos desafíos fundamentales: aparecer por primera vez ante el país como un proyecto de Estado probable y enfrentar el escrutinio permanente de los medios de comunicación nacionales e internacionales. En ambos casos los resultados no fueron buenos. La imagen mítica de las Farc se transformó, luego de una natural luna de miel con la opinión pública, en unos cuantos hechos prosaicos que no las hacían parecer muy diferentes de las opciones que el país ya conocía. El nuevo Estado que debería haber nacido en el Caguán sólo produjo la ley 002 y la administración de una justicia sumaria y militar. No aparecieron ni nuevos arreglos sociales ni formas alternativas de organización social o de distribución del ingreso.⁶ Las audiencias públicas sobre los temas de la agenda común nunca alcanzaron el carácter de un diálogo. Ciudadanos y organizaciones presentaron sus propuestas y las Farc escucharon sin llegar nunca a entablar una conversación que habría podido enriquecer los diálogos con los representantes del Estado, y haber acercado a las Farc a la sociedad. El país se quedó esperando las imágenes del futuro que lo estarían aguardando bajo el Estado que las Farc estaban construyendo.

⁶ La respuesta de Marulanda a la pérdida de respaldo popular no puede ser más clara: “Nosotros no somos una organización de beneficencia, sino un grupo revolucionario armado. ¿Y usted cree que un grupo armado puede crecer como hemos crecido si no tiene el apoyo de la gente? La gente nos quiere” (Caballero, *Op. Cit.* 23).

Al adoptar esta nueva estrategia las Farc han entrado en el terreno de la incertidumbre acerca de los resultados de sus acciones.⁷ Apostar a que su estrategia de amenaza al Estado conduce a una negociación en sus términos no es más que eso: una apuesta acerca de mundos posibles divergentes. Un mundo posible es que el Estado ceda ante la presión insostenible de la amenaza guerrillera. Sería el escenario más optimista para la organización guerrillera. El otro es un mundo en el que se combinan el escalamiento de la guerra por parte del Estado y la toma de posición de la sociedad del lado de aquel o de alguna forma estatal que lo reemplace. La estrategia de la amenaza se convierte entonces en un bumerán. En lugar de debilitar al Estado, las acciones de la guerrilla comienzan incluso a fortalecerlo de la manera más inesperada: la población de los municipios pequeños atacados por las Farc han decidido proteger los símbolos visibles del Estado. Las imágenes recientes de policías protegidos por la población civil, a costa de su propia vida, condensan la nueva situación: es la población la que ahora protege al Estado que debería protegerla y que no puede hacerlo. Las Farc habrían logrado el milagro de convertir a una población que siempre ha estado en contra del Estado en su protectora providencial.

Pero esto no quiere decir que el Estado de hoy sea el que sale fortalecido por las acciones de la población. La realidad es bien distinta: la población misma, a través de sus acciones, estaría iniciando la construcción de un Estado nuevo —“ultra mínimo” en el sentido de Nozick (*Op.Cit*)—, cuyos pilares serían la exclusión de la violencia organizada como forma de coacción política y de apropiación económica, y la adopción de reglas de convivencia aceptadas por todos en forma espontánea.

Debo subrayar el proceso de interacción mediante el cual la guerrilla ha cambiado su estrategia y cómo esa misma estrategia está sometida hoy al impacto de los cambios ocurridos en las acciones de la población civil como consecuencia, a su vez, de la nueva estrategia de la guerrilla. En los últimos dos años la guerrilla ha concentrado su actividad militar en la toma rápida de cabeceras municipales de menor tamaño, casi siempre en el Sur del país o en puntos bajo el radio de influencia de la antigua zona de tensión. El procedimiento de la guerrilla ha seguido un patrón similar: atacar el cuartel o el búnker de la policía, volar y saquear el Banco Agrario, destruir, en ocasiones, el hospital o el edificio de la alcaldía. Es obvio que el ataque, con pipetas de gas y fuego de mortero y de armas automáticas, va dirigido contra los símbolos de la presencia del Estado en esas pequeñas cabeceras municipales. Esta nueva estrategia ha sido la respuesta de la guerrilla al alto costo que habían comenzado a tener las operaciones que comprometían tropas numerosas.

Vale la pena plantear el problema estratégico de las Farc desde un ángulo distinto: ¿Qué otra opción tendrían hoy las Farc? Si las acciones militares con

⁷ Esta incertidumbre no es nueva, por supuesto. Lo que ha cambiado es la velocidad con la cual los agentes comprometidos en el conflicto y, sobre todo, la población civil, aprenden a responder ante cambios en la estrategia de los otros contendientes.

grandes concentraciones de fuerzas se han vuelto muy costosas, si las organizaciones paramilitares les disputan el control de vastos territorios y avanzan hacia la consolidación de un brazo político, incluso parlamentario, si la población no aprueba sus acciones y no depende de su protección, ¿qué opción estratégica alternativa podrían seguir las Farc? La ingenuidad pacifista, que a veces es idéntica a la euforia belicista, apostaría por la realización de gestos unilaterales de paz que devolvieran a las Farc a la mesa de negociaciones. Las Farc, sin embargo, siempre han considerado la demanda de gestos unilaterales o de muestras de una auténtica voluntad de paz como una exigencia de rendición de armas por parte del establecimiento. La elección estratégica que hoy deben hacer las Farc es similar a las que ciertas organizaciones y naciones han debido enfrentar cuando perciben que la situación estratégica ha llegado a un momento en el que la supervivencia misma de la nación o de la organización (y su razón para continuar) están en juego. Un buen ejemplo es de la decisión japonesa de atacar Pearl Harbor en 1941. Como lo ha planteado Steve J. Brams (1997), el punto crucial es que Japón no disponía de ninguna otra alternativa real en el momento. El embargo de los Estados Unidos sobre su suministro de petróleo y su relativa superioridad en el teatro de operaciones del Pacífico (hasta que Estados Unidos no lograra construir una fuerza militar adecuada) hacían que el único curso de acción fuera atacar por sorpresa, mantener por algún tiempo la ventaja en el Pacífico, y guardar la esperanza de un arreglo negociado más adelante. Un caso similar, y más contemporáneo, es el de Irlanda del Norte y la estrategia del Ira frente a la Gran Bretaña. Con un ejército de 16.5000 hombres, que esperaba llegar al poder muy pronto, la nueva situación ha hecho que el conjunto de estrategias disponibles para las Farc se haya reducido en forma peligrosa.

Es difícil suponer que en la nueva estrategia de las Farc estuviera presupuestada (al menos no en forma explícita), la respuesta de la población civil. En distintos sitios de Colombia, la población protegió a grupos de policías a punto de ser copados por el fuego de la guerrilla o respondió al ataque guerrillero con diversas formas de resistencia pacífica. No todos los casos de resistencia pacífica son iguales, por supuesto. En algunos lugares (Caldono, Coconuco) la resistencia ha sido el resultado de trabajos comunitarios y de organización de muchos años, con raíces profundas en la cultura indígena predominante en esa región. En otros, como en el pueblo cafetero de Cisneros, en Antioquia, la respuesta parece ser más cercana a una reacción espontánea ante una amenaza que ponía en peligro su supervivencia económica. En general, sin embargo, lo que antes podía calificarse como indiferencia ante los ataques de la guerrilla se ha convertido, en muy poco tiempo, en una desaprobación activa. En ninguna parte, además, puede documentarse una aprobación abierta de las acciones de la guerrilla. Peor aún: estos ataques ocurren en regiones que podrían calificarse como parte de territorios controlados desde hace muchos años por las organizaciones guerrilleras. Esto confirma las transformaciones ocurridas en la dimensión territorial del conflicto: el cambio de

estrategia puede llevar a golpear, en diversas formas, a la población que antes era protegida por las mismas organizaciones armadas. Y lleva, por supuesto, a una reacción que era impensable hasta hace unos pocos años: la resistencia pacífica ante los efectos de los ataques de la guerrilla a pueblos pequeños y medianos localizados en sus territorios tradicionales.

¿Puede negociarse el poder?

Unas pocas preguntas ayudarán a situar el problema de las condiciones para una salida negociada al conflicto colombiano. La primera es obvia: ¿Qué es lo que está en disputa en el conflicto colombiano? El poder. Si esto es lo que está en disputa, el problema de la negociación se puede definir con mayor precisión: ¿Cómo negociar el poder? La teoría de juegos da un contexto analítico para intentar una respuesta. En ese contexto aparece un nuevo conjunto de preguntas: ¿Qué es lo que ponen en juego los contendientes del conflicto colombiano? ¿Cuánto “vale” el juego para cada una de las partes? ¿Cuánto “vale” para el Estado, para la guerrilla, para las autodefensas, para los distintos grupos que conforman la población civil? Preguntar cuánto “vale” el juego para los contendientes no es una metáfora. Es una forma de representar la interacción estratégica que los ha llevado a la guerra que hoy libran en todo el territorio nacional. Lo que vale el juego para cada uno de los contendientes es lo que está dispuesto a entregar a cambio de lo que espera obtener por cesar sus acciones de guerra. Se trata de un intercambio que no está regido por una institución definida y aceptada como lo es el mercado. Es un intercambio que está por definirse y que depende de la forma, y de las condiciones, en que negocian los agentes comprometidos. Es un juego en que el análisis de las estrategias racionales de las partes no es suficiente para predecir un resultado probable. Visto desde otro ángulo: si las acciones de guerra de hoy persiguen un cierto objetivo futuro, ¿sería posible obtener, mediante la negociación, ese mismo objetivo renunciando a las acciones militares? Es claro que el objetivo esperado no podrá ser obtenido en su totalidad. No sólo porque debe repartirse o distribuirse de alguna forma, sino porque el proceso de negociación puede crear objetivos inéditos que incrementen o cambien, a los ojos de las partes, lo que perseguían en un principio. Pero esta respuesta no es suficiente: el valor de la negociación no debe verse en términos de obtener la totalidad del objetivo perseguido, sino de comparar lo que se obtiene en la situación de hoy con lo que resultaría de una negociación exitosa. La pregunta toma, entonces, otra forma: ¿Qué tanto mejora la situación de cada parte en la nueva situación que podría obtenerse a través de la negociación?

Hasta ahora las conversaciones de paz sólo han tenido dos partes: las Farc y el Estado, representado por el gobierno actual. Al ser bilaterales, han dejado por fuera a otras fuerzas armadas y no armadas cuya posición relativa sería afectada por los resultados de las negociaciones. Sin embargo, en una primera aproximación sólo tendré en cuenta a las dos partes ya mencionadas. No es fácil establecer

cuánto vale el juego para las Farc. El poder es una aspiración absoluta que no se presta, en principio, para transacciones o acuerdos. No se hace la guerra contra un régimen injusto para negociar en qué medida puede cambiarse o preservarse. La guerra revolucionaria juega al todo o nada: si triunfa impone su ley y trata de convertir en realidad su aspiración de recrear la sociedad a su manera y según sus planes. Si pierde, la historia reclamará lo ocurrido como una escaramuza más con lo absoluto. ¿Podrían situarse las Farc más acá o más allá del sueño de lo absoluto? Es la hipótesis de este ensayo que las Farc han aceptado, por efecto del curso de la guerra, la posibilidad de negociar. Pero es una negociación pensada en sus términos y como resultado de conducir al Estado, mediante la amenaza y el terror, a la situación de negociar su poder.

¿Qué estarían dispuestas a conceder las Farc a cambio de una nueva situación de poder? Lo único que pueden conceder las Farc es abandonar el uso de las armas contra el Estado. Esto implica su desaparición como organización guerrillera que busca destruir al Estado actual. Y eso sólo puede ocurrir si las Farc son integradas a un nuevo Estado. Es decir, si hacen parte de un nuevo poder que se formaría como resultado de algún proceso de negociación. Siguiendo el principio de que la máxima concesión relativa debe ser lo más pequeña posible (Gauthier, 1986), puede hacerse la siguiente formulación: para las Farc deponer el uso de las armas sólo sería aceptable si hacen parte de una nueva situación de poder en la que se haría lo más pequeña posible la probabilidad de ser aniquilados por fuerzas contrarias una vez que hayan dejado las armas. Como el principio de Gauthier es una aplicación del concepto del minimax de von Neumann y Morgenstern (1947) al problema de la negociación y de los acuerdos alrededor del poder político, el dual del principio implica que el menor beneficio relativo debe ser lo más grande posible. Es decir que, al mismo tiempo, las Farc deberían estar obteniendo el beneficio relativo más grande posible entre los beneficios más pequeños que le concedería la otra parte. En teoría, el equilibrio estaría caracterizado así: las Farc aceptarían deponer el uso de las armas y diluir su organización militar (la mínima concesión relativa máxima) si participan en el nuevo poder resultante (el máximo beneficio relativo mínimo).

Nótese que la negociación definida en esos términos pondría a las Farc más acá del sueño de lo absoluto, pero al mismo tiempo las colocaría en una situación mejor que la de hoy. Y esa es la clave de todo proceso de negociación: ganar una situación superior a la de hoy, así algunos objetivos no se obtengan. Esta afirmación es, por supuesto, polémica. En la versión economicista de las guerras irregulares de hoy (Collier, 2000: 5), ninguna organización rebelde renunciaría a sus ventajas económicas a cambio del poder o de cambios en los arreglos sociales predominantes.⁸ La historia del líder rebelde africano, de Sierra Leona, que no

⁸ Aun Collier (*Op. Cit.*: 18) reconoce que la intervención política y la participación de donantes extranjeros puede cambiar la perspectiva de una organización guerrillera. Fue lo que ocurrió en Mozambique con el Renamo. Pero no ocurrió así en Angola y su historia de diamantes y guerrilleros que mueren ya viejos, como Savimbi.

consideró suficiente la oferta de la vicepresidencia para llegar a un arreglo y exigió el Ministerio de Minas, no deja de ser impresionante y aleccionadora, y conduce a otra pregunta: en sociedades devastadas por la depredación, ¿de qué sirve el poder sin diamantes? Pero la moraleja del episodio de diamantes y poder no aplica del todo al caso colombiano. La pregunta es hasta qué punto es preferible, para una organización rebelde como las Farc, continuar una guerra basada en el terror y en la amenaza con los únicos objetivos de acumular riqueza y crecer como organización. En otras palabras, ¿preferirían las Farc mantenerse como un poder potencial, en posición permanente de amenaza contra el Estado y la sociedad, en lugar de convertirse en un poder efectivo? Antes de responder esta pregunta, es necesario establecer que la disyuntiva sugerida sólo la pueden resolver el curso de los acontecimientos dentro de esa organización y la evolución de la guerra. Por eso, cualquier enfoque que pretenda resolvérla invocando el único principio de la acumulación económica no puede ser suficiente. La posición que establece una preferencia por el poder efectivo sobre el poder de amenaza depende, en buena parte, de la evolución real de los acontecimientos. No hay ningún argumento determinista que establezca su predominio sobre la otra opción. Hay, en cambio, señales que parecen indicar la emergencia de un proceso de aprendizaje, impulsado por el curso de la guerra, que marcharía en la dirección de perseguir una negociación en sus términos, poniendo al Estado contra la pared a través del ejercicio del terror generalizado.

La dificultad para establecer cualquier proposición en este terreno es que nos encontramos en el dominio elusivo de las expectativas. De hecho, durante largo tiempo la acción de las Farc ha dependido de sus expectativas acerca del poder. No creen estar ganando la guerra por el control presente, y casi siempre volátil, de territorios, sino por el poder de amenaza que los acerca, en su percepción, al poder. Su percepción debe incluir, por lo menos, dos alternativas divergentes: que el curso de la guerra las aleja o las acerca al poder. Dentro de la racionalidad de las Farc, esto se percibe a través de los costos en los que incurre de acuerdo al tipo de estrategia adoptada. De esa forma, los costos actuarían como un criterio, o una regla de precaución, para cambiar el curso de acción en materia estratégica: si grandes concentraciones de hombres y la búsqueda de objetivos militares que involucran demasiado riesgo para sus tropas, generan costos muy altos en términos de hombres, equipos y distancia con respecto al poder, la estrategia debería ser revisada y sustituida por otra con costos menores y con una mayor probabilidad de acercarlas al poder. Si, por otro lado, aparecen formas más baratas o menos costosas de lograr los mismos efectos, es preferible optar por ese curso de acción. Pero estas formas más baratas de conducir la guerra tiene también sus costos. Recuérdese que las Farc es un ejército con más de 16.000 hombres preparados para combatir y formados en la idea de llegar al poder a través de las armas. Convertir un ejército tan grande en una organización que regresa a la guerra de guerrillas y que usa el terror en las ciudades, a través de la movilización de grupos

muy pequeños (de 5 a 10 hombres), no es fácil. Mantener la unidad de mando y la moral de unas tropas que ya no están realizando lo que esperaban hacer, supone cambiar en forma instantánea las expectativas de los combatientes. Una consecuencia inevitable serán las deserciones y la desazón ante el cambio repentino en las expectativas de los combatientes.

¿Qué es lo que quiere el Estado o el establecimiento? Aunque suene paradójico es difícil contestar esta pregunta. Una respuesta inmediata diría que el Estado, o quien lo represente en el momento, aspira, por lo menos, a conservar el poder o sustituirlo por un arreglo en el que los mismos grupos que hoy lo componen, dirigen o usan mantengan su posición relativa. Pero esto no es más que una respuesta hipotética sin ninguna base documental explícita. Los grupos que han tenido control sobre el Estado, o que lo han usado para promover sus intereses privados, no tienen un proyecto político explícito. Lo único que puede decirse es que el alcance y las características del conjunto de aspiraciones del establecimiento dependerán de su capacidad para lograr y promover un proyecto político legítimo con apoyo ciudadano. Por primera vez en muchos años, la probabilidad de un proyecto nacional de ese estilo parece encarnar en la propuesta que Alvaro Uribe ha venido promoviendo. Pero Uribe no ha sido preciso en el tema de la guerra y de la paz. Ciento: ha intentado promover la idea de resolver los dos problemas nacionales básicos, el de la seguridad y el de la pobreza, sin tener que hacer ninguna concesión a las organizaciones armadas por fuera de la ley (Santos, 2002: 44). Supone que los violentos, los fuera de la ley, pueden ser disuadidos con una doble estrategia: una ofensiva militar, con el apoyo explícito de la población, y una política de inversión social a favor de los pobres. En el contexto de este artículo, lo interesante no está en la discusión de la bondad y pertinencia del plan de Uribe Vélez, sino en entender las implicaciones de la idea de disuasión sobre la que se basa: las organizaciones armadas, discurre Uribe, dejarán sus acciones, por voluntad propia, una vez perciban que su acción militar no tiene éxito, pues ha sido contenida y derrotada por las fuerzas armadas, y su reclamo frente a la injusticia y la pobreza ha sido superado por la inversión social del Estado. Pero mientras eso ocurre, si llegare a ocurrir, las organizaciones armadas seguirán ejerciendo su poder de amenaza contra el Estado, de la misma forma que las múltiples organizaciones criminales que existen en el país seguirán imponiendo su poder de depredación. Frente a esta situación real, el discurso de Uribe, y sobre todo, el imaginario excluyente que ha regresado, con optimismo, a ciertos sectores sociales y políticos, se volverá muy costoso.

En este contexto, ¿puede pensarse en una negociación política del conflicto armado colombiano? Francois Bourguignon, en una intervención que no ha sido tenida en cuenta por nuestros expertos, es quien más se ha acercado a plantear un diseño posible para un proceso de negociación del conflicto armado colombiano. Digo posible porque la propuesta del economista canadiense está basada en pensar el conflicto colombiano como la articulación de varios tipos de violencia (y de criminalidad) que confluyen en el tiempo y se retroalimentan en una espiral que

hace inviable un Estado de derecho en Colombia. El lenguaje sonará extraño, y hasta chocante, en oídos acostumbrados a razonamientos menos realistas:

“La mejor solución es *comprar* a las personas por fuera de la ley. Al hacerlo se está comprando tiempo. Si logra comprar 15 años de paz, le dará la oportunidad para hacer cosas muy positivas al país. Así pueden desintegrar este ejército ilegal. Hay que centrarse en el análisis de las posibilidades del proceso de paz. Lo más útil es encontrar un conjunto de estrategias posibles, deseables y creíbles de los diferentes grupos, y analizar su compatibilidad. La clave está en la teoría de juegos para entender las estrategias posibles y sus resultados. Sólo así, con una negociación estratégica bien fundamentada, se podrá salir con éxito de la situación que tiene bloqueada a la sociedad colombiana” (Bourgignon, 2000: 113, bastardilla en el original).

Nótese, primero, que el autor no se refiere tan sólo a las Farc. Habla de *comprar* a las personas que se encuentran por fuera de la ley. Y no son pocas. Es más: no son personas, son organizaciones. En una sociedad en la que la estrategia básica es la depredación (del Estado, de los más débiles, de los menos organizados), fuera de la ley están situados todos aquellos que usan su capacidad militar, su lugar social, su organización y su poder de amenaza para obtener y controlar recursos por intermedio de la violencia, la coacción o la simple ilegalidad. Como lo hemos planteado en otros textos (Salazar y Castillo, 2001; Salazar, 2001), la estrategia de la depredación no es exclusiva de la subversión: atraviesa todo el espectro social. Por lo tanto, toda negociación política del conflicto colombiano implica tener en cuenta a aquellos grupos por fuera de ley que han contribuido a la creación de un orden basado en la depredación. Esto no quiere decir que se vaya a negociar el poder con todos los grupos al margen de la ley. Sólo implica que es necesario tenerlos en cuenta, de acuerdo a sus características, formas de acción y aspiraciones. En una palabra, de sus estrategias, como bien lo plantea Bourgignon.

¿Qué quiere decir *comprar* en este contexto? Para la violencia y la ilegalidad que proviene del acceso desigual a la riqueza y a las oportunidades para producirla y disfrutarla, implicaría cambiar de forma significativa la distribución de oportunidades en Colombia. Esto sólo puede hacerlo un nuevo arreglo estatal que se comprometa en una política de redistribución de las oportunidades y del ingreso. Para el crimen organizado, para las bandas y organizaciones ilegales, para los ladrones de cuello blanco, la única forma sería intercambiar su reintegración a la vida legal a cambio de la entrega de parte de los activos y fondos alcanzados a través de sus acciones ilegales. Las organizaciones de ladrones de cuello blanco, en especial, deberían devolver lo que han obtenido a través del saqueo constante del Estado. Se trataría de un intercambio entre un nuevo Estado, que nos

representaría a todos, y unas organizaciones al margen de la ley que se han apropiado de recursos y de riqueza que nos pertenecen a todos. Como se planteará más adelante, esta entrega de los recursos obtenidos a través de la depredación debe ser una estipulación inicial del proceso, la que definirá la posición negociadora inicial de las partes.

Implementar la estrategia de la compra se vuelve más difícil en el caso de organizaciones armadas como las Farc. El significado del término *comprar* se vuelve más difícil. Si las Farc aspiran al poder o a participar en el nuevo tipo de poder que surja de las negociaciones, ¿qué querría decir comprar en ese contexto? No se trata de una pura operación económica. El valor de las Farc como organización no es la suma de lo que costaría convencer a cada uno de sus militantes para que regresen a la vida civil. De nuevo, el problema es cómo tratar la cuestión del poder. En el caso de las Farc, como en el caso de los que se han apropiado de la riqueza del Estado por la vía de la depredación, lo primero sería incluir una estipulación inicial básica en la negociación: Ninguna parte puede aportar a la mesa de negociación lo que ha obtenido a través de interacciones forzadas con otras partes negociadoras. David Gauthier lo plantea así:

“Y si lo que alguno aporta incluye el fruto de una interacción previa forzada sobre los otros negociadores, ese aporte ya no resultará inicialmente aceptable. Si alguien se apodera del producto de mi trabajo y luego me dice: ‘Hagamos un trato’, quizás yo esté obligado a aceptar, pero no lo haré voluntariamente” (*Gauthier, Op. Cit:* 32).

La clave del planteamiento de Gauthier está en el carácter voluntario que deben tener las negociaciones y sus resultados. De hecho, la negociación misma debe estar construida sobre unas reglas que prefiguren el nuevo Estado bajo el que van a convivir las partes negociadoras. En ese contexto, el producto de la depredación no debería hacer parte de lo que se va a negociar, sino de lo que hará parte del nuevo Estado en construcción. No tengo una etiqueta exacta para este tipo de recursos, pero la idea básica es la de un fondo cuya uso sólo podrá ser decidido por los nuevos arreglos sociales que se pacten en la mesa de negociación y que cuenten con el aval de la mayor parte de los ciudadanos. En ese contexto, las organizaciones armadas pueden participar del nuevo poder que surgiría de la mesa si, a su vez, contribuyen con su parte de la riqueza obtenida a través de la depredación. Cuando Marulanda dice que “la oligarquía quiere que la paz le salga gratis” (*Caballero, Op. Cit:* 25) está tocando un punto fundamental de cualquier negociación seria. ¿Cuánto está dispuesta a poner sobre la mesa la llamada “oligarquía”? Nadie lo ha dicho nunca con claridad porque hasta ahora nadie ha representado en forma clara al establecimiento, y porque, además, en Colombia más que un establecimiento lo que hay es una diversidad de grupos y organizaciones que se disputan el uso del Estado y de sus recursos sin seguir ningún proyecto coherente.

¿Qué hacer cuando las negociaciones dejan de ser bilaterales? ¿Cómo incluir a otras fuerzas armadas y no armadas? ¿Cómo incluir a las autodefensas? ¿Cómo incluir a la sociedad o a la población, es decir, a la mayoría de los colombianos que no están ni armados ni organizados, y tampoco se sienten representados por ninguna de las partes visibles del conflicto? La propuesta de la llamada “Comisión de Notables” (Lozano, 2001b) se basaba en la idea de una negociación política bilateral que, luego, incluiría a otras fuerzas sociales y políticas en un gobierno pluralista, avalado por un referendo o por una asamblea constituyente (cuya composición se basaba también en una idea de negociación bilateral). El defecto básico de esta propuesta es darle a la insurgencia armada, en este caso a las Farc, la representación de los intereses del pueblo colombiano en la mesa de negociaciones. Supondría, en el lenguaje de la teoría de juegos cooperativos, que habría una coalición entre parte de la sociedad y las organizaciones armadas que enfrentan el poder del Estado. El curso de los eventos en Colombia no permite ver la emergencia de ese tipo de coalición.

Sin embargo, sí es posible usar la teoría de juegos cooperativos para pensar la estructura de una probable negociación. Cuando hay más de dos partes en un conflicto, la teoría de los juegos cooperativos supone que una solución racional optimizadora no es posible y que la comunicación entre las partes debe generar coaliciones que mejoren la posición relativa de las partes. Esto abre un problema inédito: ¿cuál debe ser el criterio de distribución de la utilidad o de los pagos entre los miembros de cada coalición? Si una coalición se impone, ¿cómo repartiría sus beneficios? La teoría no tiene una respuesta contundente y precisa. Puede definir, a través de la función característica (Luce and Raiffa, 1957; von Neumann and Morgenstern, 1947) lo que una coalición podría obtener, en una cierta situación de juego, pero no puede predecir cuál sería el mejor arreglo posible entre los miembros de la coalición. Es decir, deja abierto el tipo de arreglo social o de norma de comportamiento que resultaría del proceso de negociación. Lo única formulación general que puede hacerse es que una solución aceptable (Resnick, 1987: 286) sería aquella con respecto a la cual ningún participante tendría una objeción válida. Este tipo de formulación está siempre abierto a la crítica por su carácter indefinido o ilimitado. Al mismo tiempo, sin embargo, pone de presente las dificultades inherentes a todo proceso de negociación de un conflicto, más si es del grado de complejidad del colombiano.

A manera de conclusión

Dada la confluencia de criminalidad, depredación y conflicto en Colombia, una propuesta razonable de negociación debe partir de considerar los beneficios mutuos de las partes y la exclusión de la mesa de los productos de la depredación. En ningún caso, como lo plantea muy bien Gauthier (*Op. Cit.*, 33), la negociación debe estar basada en restricciones morales o racionales situadas por fuera del contexto

del beneficio mutuo. La idea de *comprar* a los agentes violentos es una forma de iniciar la concreción de este tipo de enfoque. En este contexto, *comprar* no es ceder ante los agentes violentos, es garantizarles una situación mejor que la presente a cambio de deponer el uso de las armas o abandonar el ejercicio de conductas criminales y depredadoras. Pero definir ese *comprar* no es fácil. Hace parte de un largo y complicado proceso de negociación. Sin embargo, reconocer, al menos que el poder es lo que está en juego, y que el tener en cuenta el beneficio mutuo de las partes puede hacernos avanzar hacia un arreglo social más justo y estable, es de por sí una ganancia.

Bibliografía

- Bourgignon, F. 2000. “Nueva Violentología”. *Dinero*, No 107, p. 113.
- Caballero, A. 2002. “A la sombra del fusil”. *Revista Diners*, marzo, pp. 20-25.
- Collier, P. 2000. “Economic Causes of Civil Conflict and their Implications for Policy”. Washington, DC: World Bank, Mimeo.
- Gauthier, D. [2000 (1986)]. *La moral por acuerdo*. Barcelona: Gedisa.
- Lozano, C. 2001a. *Farc. El país que proponemos construir*. Bogotá: Oveja Negra.
- 2001b. Comentarios en el debate sobre la política gubernamental, en F.Cepeda (ed.), *Haciendo Paz. Reflexiones y perspectivas del proceso de paz en Colombia*. Bogotá: Embajada de los Estados Unidos, Fundación para la paz, p. 126.
- Luce, R. And H. Raiffa. 1957. *Games and Decisions. Introduction and Critical Survey*. New York: John Wiley and Sons.
- Nozick, R. [1974, 1988]. *Anarquía, Estado y Utopía*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Pardo, R. 2001. “10 Años de acuerdos, 20 de procesos de paz, 40 años de conflictos”, en F. Cepeda (ed.), .., pp. 75-82.
- Pécaut, D. 2001. *Guerra contra la sociedad*. Bogotá: Espasa Hoy.
- Resnick, M. *Elecciones. Una introducción a la teoría de la decisión*. Barcelona: Gedisa editorial.
- Salazar, B. 2001. “Hobbes, el conflicto y los juegos evolutivos”. En: Valencia, A. (editor), *Exclusión social y construcción de lo público en Colombia*. Bogotá: Cerec, Cidse, pp. 265-290.
- y M.P. Castillo. 2001. *La hora de los dinosaurios. Conflicto y depredación en Colombia*. Bogotá: Cerec, Cidse.
- Santos, A. 2002. “Uribe sin tapujos”. *Semana*, No 1034.
- Von Neumann, J. and Morgenstern, O.1947. *The Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton: Princeton University Press.